

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN -  
SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, veintiséis (26) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Apelación auto  
Exp.001-2018-00124

Vencido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se resuelve el recurso de apelación interpuesto por JUAN JAIRO VÁSQUEZ VÁSQUEZ, en el proceso ejecutivo a continuación que adelante en contra de JUAN GUILLERMO LONDOÑO MOLINA (Rad. 05001-31-05-001-2018-00124-01).

**ANTECEDENTES:**

Frente a la orden de apremio del 2 de marzo de 2018, notificada por estados del 10 de abril de ese mismo año (fl 121 del cuaderno del proceso ejecutivo), el curador ad litem designado en favor del ejecutado, propuso la excepción de prescripción fundamentada en que desde la data de la sentencia y del auto que declaró en firme la liquidación de costas y dispuso el archivo de las diligencias, y la presentación de la demanda ejecutiva, transcurrieron más de 4 años.

En la diligencia del 9 de marzo de 2020, el juzgado de primer grado declaró probado ese medio de defensa y en consecuencia dispuso la terminación del trámite. Para ello consideró las fechas de ejecutoria de las providencias que constituyen el título ejecutivo, de la demanda, y de presentación de la

reclamación al convocado a juicio, concluyendo que entre unas y otras, aconteció el lapso trienal a que aluden las normas que regulan la materia.

El ejecutante interpuso la alzada insistiendo en que el fenómeno extintivo se interrumpió y suspendió, con la reclamación al empleador.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

#### CONSIDERACIONES:

Según el numeral 2° del artículo 442 del CGP, norma aplicable a este rito por lo previsto en el artículo 145 del CPT y de la SS, una de las excepciones que puede proponerse cuando la base de la ejecución es una providencia, es la de prescripción, medio que se encuentra en los artículos 488 del CST y 151 del estatuto adjetivo laboral, disposiciones según las cuales las acciones derivadas de derechos sociales prescriben en tres años contados desde que la obligación se hizo exigible, término que se interrumpe por un lapso igual, con una simple reclamación elevada al deudor.

Para determinar cuándo se hicieron exigibles las obligaciones cobradas en este asunto, debe acudir al artículo 302 del CGP, que impone las siguientes reglas: i) si la providencia se dictó en audiencia, cobra ejecutoria en ese mismo momento, si contra ella no se ejercieron los medios de impugnación, o no se solicitó su aclaración o complementación, y ii) si la providencia se dictó por escrito, queda ejecutoriada tres días después de su notificación.

Con base en esas precisiones se descende al sub lite encontrando que la sentencia proferida el 4 de marzo de 2014, y el auto del 9 de abril de esa misma anualidad, que declaró en firme la liquidación de costas, notificado al día siguiente, contienen las obligaciones aquí cobradas. En esa línea, tales proveídos cobraron ejecutoria y se hicieron exigibles: la sentencia, el 4 de marzo de 2014, porque fue dictada en audiencia y contra ella no se interpuso recurso alguno; y el auto que declaró en firme la liquidación de gastos, el 16 de abril de 2014, esto es, tres días después de su notificación por estados como lo ordenan los artículos 41 del CPTSS y 295 del CGP. De allí que el ejecutante contara con tres años a partir de esas fechas para presentar la demanda ejecutiva: tenía hasta el 4 de marzo de 2017 para hacerlo por la sentencia, y hasta el 16 de abril de 2017, por las costas; sin embargo, lo llevó a efecto fuera de esos plazos, el 27 de febrero de 2018 (fl 115).

Ahora bien, es cierto que el promotor reclamó al empleador para lograr la satisfacción de las providencias en comento, a través de escrito recibido por aquél el 24 de julio de 2014 (fls 120 y 172). Ese escrito interrumpió el fenómeno estudiado solo por un lapso igual, lo que significa que se extendió el plazo trienal hasta el 24 de julio de 2017, aun así, el libelo gestor, fue introducido luego de esa data, de donde se colige la prosperidad de la excepción.

No resulta adecuado conforme a las normas adjetivas, predicar como lo hace el apelante, que la reclamación anunciada suspendió el periodo de prescripción, porque al no ser el ejecutado una entidad pública, no tiene aplicabilidad en este evento, lo regulado en el artículo 6 del CPT y de la SS y la hermenéutica planteada en la sentencia C-792 de 2006, dado que en los casos de litigios frente a particulares, no se ha previsto que esté en suspenso la prescripción, mientras no se dé respuesta a una solicitud a ellos presentada, como sí ocurre cuando el demandado es estatal.

Por lo explicado, es patente lo infundado de la censura al auto cuestionado, imponiéndose para esta instancia su confirmación.

Finalmente, siguiendo el artículo 365 del CGP, por haberse resuelto desfavorablemente el recurso vertical, costas en esta instancia a cargo del ejecutante, se fijan como agencias en derecho un SMLMV.

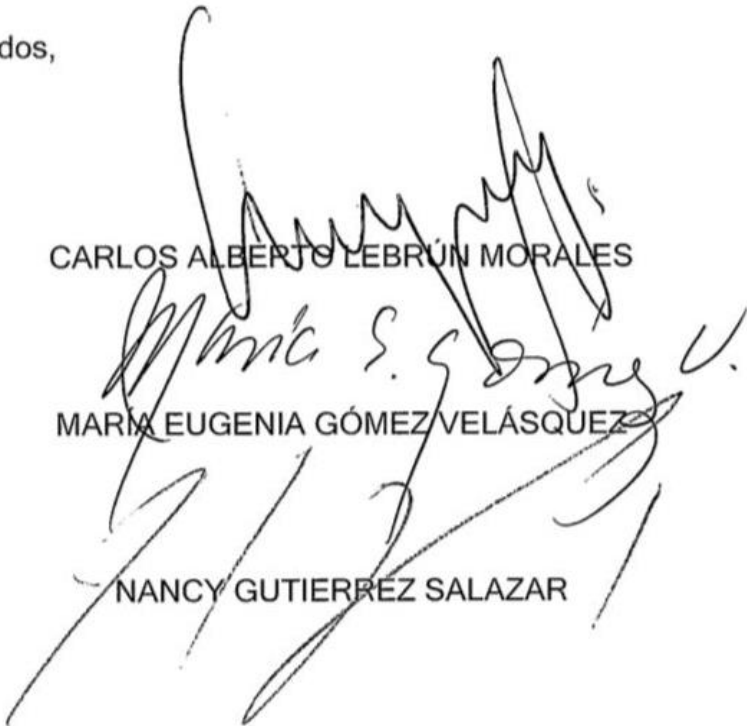
DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, CONFIRMA el auto apelado de fecha y procedencia conocidas, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

Costas en esta instancia a cargo de Juan Jairo Vásquez Vásquez. Se fijan las agencias en derecho en un SMLMV.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Certifico: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 70 fijados el 27 de abril de 2021 en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El Secretario.